JUZGADO CUARENTA LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C, veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por Jairo Eduardo Garzón Rojas contra Archivo Central de Bogotá – Cundinamarca – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas. Radicado 2022-00014-00.

Agotado el trámite del asunto, y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

DERECHOS INVOCADOS: Solicita la actora que se le ampare su derecho fundamental de petición.

PERSONA O ENTIDAD CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN: Archivo Central de Bogotá – Cundinamarca – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y al coordinador del área o grupo de archivo central y gestión documental del centro de servicios administrativos jurisdiccionales para los juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá D.C.

PRETENSIÓN: se ordene al Archivo Central de Bogotá – Cundinamarca – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas:

Desarchivo del proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado No. 1986-4692 como demandante Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa en contra de Jairo Eduardo Garzón Rojas y Luz Marina Rodríguez Suarez.

HECHOS RELEVANTES: como fundamento del amparo constitucional, en síntesis, se relacionaron los siguientes:

1. Que ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, se tramitó proceso ejecutivo hipotecario de Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa en contra de Jairo Eduardo Garzón Rojas y Luz Marina Rodríguez Suarez, bajo el radicado No. 1986-4692 dentro del cual se realizaron varios embargos y que a la fecha se encuentran vigentes.
2. Expresa que una vez culminado el referido proceso, se archivó según información brindada de manera verbal por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, en la caja o paquete 45 en el año 2012, encontrándose en la actualidad vigentes los embargos allí decretados.

3. Afirma que procedió el 24 de septiembre de 2019, a realizar el respectivo trámite de desarchivar del paquete 45 de 2012 ante el Archivo Central tal como consta con la solicitud aportada con solicitud No. 23439.
4. Como quiera que no se allegó información acerca de la respectiva solicitud de desarchivar por parte del Archivo Central; el 29 de abril de 2021, radicó memorial al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso 1986-4692 solicitando se le reconociera personería para actuar dentro del referido proceso conforme al poder a mi otorgado por uno de los demandados y el desarchivar del expediente, con el fin de poder solicitar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo.
5. Que el 08 de junio de 2021, radicó derecho de petición ante el Archivo Central – Convida y Centro de Servicios Administrativos de la Rama Judicial de Bogotá de manera electrónica a los siguientes correos electrónicos consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y cseradmvcvifml@cendoj.ramajudicial.gov.co; dentro del cual se solicitó el desarchivar del proceso e información del trámite de la solicitud de desarchivar con solicitud No. 23439 de fecha 24 de septiembre de 2019.
6. Afirma que el 17 de junio de 2021, presentó nuevamente memorial al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, solicitando información del paquete o caja donde se encuentra archivado el proceso 1986-4692, adjuntando además la copia del Acta o planilla con la cual fue entregado el proceso al Archivo Central, información esta requerida por el mismo Archivo, dentro del cual el respectivo juzgado emitió respuesta el día 17 de junio de 2021 mencionando que el referido proceso fue devuelto al Archivo Central en el paquete 3 devoluciones 2012 y que este fuera regresado a su paquete de origen el cual le corresponde la caja 159 con ingreso No. 99925 y anexándose además la planilla de devoluciones.
7. Que el 23 de junio de 2021, bajo el No. 20-28089 radicó solicitud de desarchivar del presente proceso ante el Archivo Central, que según información brindada por el juzgado y de la planilla adjunta se encuentra en la caja 159 con ingreso No. 99925 y anexándose el pago del arancel judicial tal como se desprende del pantallazo de la solicitud que se aporta.
8. Que como quiera, que dentro del término que tenía el archivo central para tramitar el desarchivar se venció sin emitir respuesta; el 27 de septiembre de 2021 presentó nuevamente derecho de petición ante el Archivo Central – Convida y Centro de Servicios Administrativos de la Rama Judicial de Bogotá de manera electrónica a los siguientes correos electrónicos consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y cseradmvcvifml@cendoj.ramajudicial.gov.co; dentro del cual se solicitó el desarchivar del proceso e información del trámite de la solicitud de

desarchivar que se encuentra archivado en la caja 159 con ingreso No. 99925.

9. El 15 de octubre de 2021, el Archivo Central emitió respuesta al derecho de petición, informando que: "El proceso no fue encontrado, dado que: DEL AÑO 2012 NO SE HALLA EL PAQUETE 159, VERIFICAR Y COMPROBAR CON EL JUZGADO SI ESTE FUE ENTREGADO A LA BODEGA MONTEVIDEO 2."
10. El 05 de noviembre de 2021, se radicó memorial al juzgado solicitando información de nuevo paquete o caja de archivo, pues, esta solicitud fue requerida por el Archivo Central, ya que con la anterior información suministrada este no logró ubicar el expediente; y el Juzgado emite respuesta el día 08 de noviembre de 2021, dentro el cual manifiesta que el expediente al revisarse en la plataforma del SIGLO XXI este fue devuelto al archivo central en la caja 30 con ingreso No. 34538 con constancia de devolución de fecha 23 de noviembre de 2012.
11. El 10 de noviembre de 2021, solicitó al Archivo Central de desarchivar bajo el No. 21-40350, anexando además un nuevo pago de arancel judicial, pero esta vez con información de que el proceso se encuentra archivado en la caja 30 con ingreso No. 34538 con constancia de devolución de fecha 23 de noviembre de 2012.
12. Finalmente, que a la fecha de presentación de este escrito de tutela, el archivo central no se ha pronunciado sobre la nueva solicitud de desarchivo bajo el No. 21-40350, pues ya ha pasado más del tiempo que tiene esta entidad para dar respuesta sobre esta nueva solicitud, y que, tanto el juzgado como el archivo central no dan respuestas concretas, además, ha pasado casi un año en este trámite de desarchivo, en donde el juzgado le brinda una información de ubicación de expediente en el archivo y el archivo central solo da respuestas de que este no se halla, dejándolos desamparados judicialmente porque esta información solo la tienen ellos.

TRAMITE PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 17 de enero de 2022 (archivo 007 del expediente digital) y fueron notificados Archivo Central de Bogotá – Cundinamarca – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y al Coordinador del área o grupo de archivo central y gestión documental del centro de servicios administrativos jurisdiccionales para los juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá D.C, en debida forma tal y como consta en archivos 009 a 012 del expediente digital. De otra parte, se comunicó la existencia de la presente acción constitucional a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE- (archivo. 008 del expediente digital).

CONTESTACION

El Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, a través del Juez César Augusto Brausin Arévalo rindió informe el 19 de enero de 2022 así:

1. Indica que, quien solicita el desarchive es el señor Wilfrido Jaimes Salcedo Elías, identificado con la C.C. No. 19.233.029, quien ostenta la legitimación en causa para obtener respuesta a la petición de desarchive-.
2. Que quien otorga el poder no se encuentra legitimado en causa para reclamar la protección al derecho de petición que se reclama con la solicitud de desarchive; pues no se demostró en la primigenia petición que el peticionario actuara por poder o bajo mandato del señor Garzón Rojas.
3. Que respecto de la petición de desarchive, obsérvese como en el acápite paquete señala el peticionario que el mismo corresponde al paquete 45 del año 2012. No obstante, en los anexos aportados con el escrito de tutela se evidencia que el proceso fue devuelto al archivo central para que se incorporara en la caja 159 con ingreso 99925 que corresponde al archivo Convida.
4. Expresa que es evidente que se solicitó mal el desarchive al no colocar los datos correctos, que el paquete 45 de 2012 no corresponde al proceso reclamado y que el mismo corresponde es a la caja 159 la cual no tiene un año señalado, y que para su ubicación la DESAJ Bogotá – Cundinamarca señala como obligación indicar al momento de reintegro al archivo el número de ingreso la Caja y el archivo que correspondía, que para el caso en concreto era Convida.
5. Que está vinculada no ha vulnerado el derecho fundamental invocado, por lo que, en relación con el Despacho Judicial accionado debe negarse, sin perjuicio; de la orden que ha de dársele a la DESAJ Bogotá – Cundinamarca, quien a la data y conforme lo acreditado ostenta la guardia del expediente 11001-31-03-017-1986-04692-00.
6. Finalmente, solicitó se niegue la acción de tutela de la referencia en relación con esta vinculada, toda vez que no existe vulneración del derecho fundamental, y se desvincule a esta accionada, debido a que el reproche tutelar se dirige contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá –Cundinamarca.

El accionado archivo Central de Bogotá – Cundinamarca – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas rindió informe el 20 y 21 de enero de 2022 así:

1. Afirma que se allegó certificación expedida por el coordinador de grupo archivo central (págs. 62 a 65 archivo 016 y págs. 5 a 8 del archivo 017 del expediente digital), donde se hace constar que el expediente 1986-4692 no

fue encontrado, dado que del año 2012 no se halla el paquete 159, VERIFICAR Y COMPROBAR CON EL JUZGADO SI ESTE FUE ENTREGADO A LA BODEGA MONTEVIDEO 2, se debe consultar la respuesta brindada por parte de esta dependencia con el juzgado pertinente para más información, Si es el caso, se hace necesario que aporte copia del acta de entrega y planilla donde esté relacionado su proceso y certifique el recibido por parte de Archivo central: información que permitirá dar con la ubicación física del expediente, la cual deberá solicitar al Despacho judicial en donde cursa su proceso"

2. Que, a su vez, se evidenció respuesta a solicitud No. 107 del año 2020, donde se comunicó que el paquete 45 del año 2012, no se encuentra en bodega Montevideo 2, dado que se realizó búsqueda en el archivo del año 2012, sin tener resultados fructíferos, información que fue puesta en conocimiento en fecha 11 de marzo de 2020 al correo de la señora MARIA FERNANDA OCAMPO.
3. Expresa que se procedió a realizar la verificación en bodega Montevideo 2 del proceso que ocupa la atención de manera inmediata y luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda exhaustiva en bodega Montevideo 2, a través de la asistente administrativa AMERICA BARROLLETA, informó que, en el archivo denominado "CONVIDA", se registró que el expediente solicitado fue identificado con el número de registro 99925 el cual corresponde a la caja 159 del año 2012; por lo tanto, se realizó rastreo físico en bodega, hallando la caja pero el proceso no se encontró físicamente y en la tapa se observó manuscrito que indica que el proceso con registro 99925 fue desarchivado.
4. Lo anterior, porque con posterioridad a 23 de noviembre de 2012 el Juzgado registró que, el proceso fue devuelto a "ARCHIVO CENTRAL - CONVIDA INGRESO No. 34538 CAJA 30". Por consiguiente, se procedió a la búsqueda en bodega MONTEVIDEO 2 de dicha caja, pero el proceso No. 1986-4692, no se encuentra relacionado en la planilla pegada a la caja número 30 del archivo Convida, ni físicamente. Y, se constató que, el número de ingreso 34538 no coincide con los datos del proceso.
5. Afirma que es necesario que el JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO de esta ciudad, le informe al usuario si este reposa en el Despacho o en caso de un eventual re-archivo posterior al año 2012, le aporte copia del acta y planilla donde esté relacionado el expediente que acredite el recibido por esta dependencia, caso contrario es imposible realizar una búsqueda efectiva.
6. Que se da alcance a respuesta de solicitud de desarchivo al señor JAIRO EDUARDO GARZÓN ROJAS, mediante correo electrónico

jairoeduardogarzon@gmail.com, aura_01_montes@hotmail.com y auramontesabogada@gmail.com aportado en escrito de tutela.

7. Expresa que hasta el momento esta accionada ha realizado todo lo posible por dar con la ubicación del proceso, sin tener resultados, lo cual no obedece a la negligencia sino a la imposibilidad física.
8. Finalmente le solicita al Despacho desvincular a esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca – Amazonas, de la presente acción constitucional.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela se estableció como un mecanismo para garantizar la Protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y, la misma fue reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, que señaló las reglas básicas de su aplicación. Es así como el artículo 6° de dicha normativa delimitó su procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios salvo que fuera interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

PROBLEMA JURÍDICO corresponde al despacho resolver lo siguiente:

Frente a la solicitud de desarchive del expediente con Rad. N° 11001310301719860469200 ¿Constituye una respuesta de fondo, infórmale al actor que este no ha sido ubicado en la oficina de archivo central?

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental de petición, aquel que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, dicha norma está reglamentada por los artículos 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, así: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”*.

Así mismo, dicha normatividad desarrolla el derecho de petición en su artículo 14, señalando que como regla general toda petición debe resolverse en el término de 15 días hábiles, exceptuando las peticiones de documentos e información que deben resolverse en 10 días y las consultas, las cuales tienen prescrito un término de 30 días; y que, cuando no fuere posible resolverla en dicho término, deberá

informarse de inmediato lo pertinente al interesado (antes del vencimiento del término señalado en la ley), exponiéndole las razones del caso y dándole a conocer el término razonable para resolverla, el cual no podrá exceder del doble del término inicialmente previsto.

Sobre el tema, el Tribunal Constitucional colombiano ha señalado que las autoridades peticionadas deben informar los inconvenientes y el tiempo en que se dará respuesta cuando no se pueda resolver en el plazo establecido: *“En relación con el término legal para suministrar respuesta, esto es, el plazo que tiene la administración o el particular para resolver las peticiones formuladas, debe consultarse al artículo 14° de la ley 1437 de 2011 que señala el término de quince días para dar respuesta a la petición. “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”. De no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de suministrar la contestación en dicho término, la autoridad o el particular deberán explicar los motivos y señalar una nueva fecha en el cual se realizará. Para este efecto, el criterio de razonabilidad será determinante, ya que es imperioso tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud”.* (Sentencia T-369 de 2013).

Aunado a ello, en pronunciamiento posterior, la Corte mediante la sentencia T-903 de 2014 indicó que: *“(…) la jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz distinto de la acción de tutela, motivo por el cual quien resulte afectado por la vulneración de este derecho puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”.* Así las cosas, se tiene que, no existiendo otro instrumento judicial para proteger el derecho de petición, por tratarse de un derecho fundamental cuya aplicación es inmediata, el mecanismo más adecuado es la acción de tutela.

Por otra parte, la honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha considerado que el elemento esencial del mismo radica en la resolución pronta y oportuna por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud y en el derecho que le asiste al solicitante a obtener una respuesta de fondo, independientemente de que el sentido de la decisión sea positivo o negativo. Así entonces, luego de nada serviría dirigirse a una autoridad en particular con la esperanza de una respuesta pronta y eficaz, si ésta no resuelve dentro de los términos legales, o, cuando a pesar de hacerlo el contenido de la respuesta es vago, impreciso o se reserva el sentido de la decisión.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el núcleo esencial de este derecho reside en *i)* una resolución pronta y oportuna; *ii)* una respuesta de fondo, lo que implica que sea clara, precisa, congruente y consecuente; y *iii)* la notificación al peticionario (T-154 de 2018):

(i) Resolución pronta y oportuna. Es una obligación de las autoridades y de los particulares responder las peticiones en el menor tiempo posible, sin exceder el término de 15 días hábiles establecido en la ley, salvo excepciones legales.

(ii) Respuesta de fondo o material, requisito que se cumple siempre que la contestación sea: a) clara, esto es, que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) **precisa, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruente, es decir, conforme con lo solicitado; y d) consecuente con el trámite en el que la solicitud es presentada**". (subrayado y negrilla propio).

(iii) Notificación de la decisión. Este requisito se satisface poniendo en conocimiento del ciudadano la respuesta de la autoridad o del particular, pues de ello se deriva la posibilidad del peticionario de presentar la respectiva impugnación.

Finalmente, el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 amplió los términos para resolver los derechos de petición, pasando de 15 a 30 días hábiles mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria, dejándose claro que cuando se trata de petición de documentos e información se deben resolver dentro de los 20 días siguientes a su recepción y cuando se trata de consultas ante autoridades se deben resolver dentro de los 35 días siguientes a su recepción.

DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PÚBLICOS

El derecho al acceso a documentos públicos tiene rango constitucional, por la trascendental importancia que tiene al momento de promover y facilitar el control por parte de los ciudadanos a las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones. Dicha protección no solo está dada por el régimen jurídico nacional, sino que además tiene fuentes en el derecho internacional, que han sido reseñadas por esta Corporación.

Cuando el artículo 74 de la Constitución de 1991, establece que "*todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los Acción de Tutela Rad. 2021-00366-00 casos que establezca la ley*", está autorizando a toda persona para que acceda, en principio, a cualquier información oficial, consulte documentos que reposen en las oficinas públicas y soliciten u obtengan copias de los mismos, con excepción de aquellos que tengan una reserva de carácter legal o alguna relación con la defensa o seguridad nacional.

Así, la carta política de 1991 establece que, dentro del régimen democrático, participativo y pluralista colombiano, el derecho al acceso a documentos públicos tiene rango constitucional, por la trascendental importancia que tiene al momento de promover y facilitar el control por parte de los ciudadanos a las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones.

Dicha protección no solo está dada por el régimen jurídico nacional, sino que además tiene fuentes en el derecho internacional, así:

"En principio la Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce de manera expresa el derecho de acceso a la información pública. Su

artículo 13, consagra el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio. Ha sido entendido que el derecho de acceso a la información queda comprendido dentro del contenido normativo de esta disposición, la cual hace alusión expresa al derecho a buscar información en el caso Claude Reyes, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el acceso a la información era un derecho humano que hace parte del derecho a la libertad de expresión, enunciado en el artículo 13 de la CADH”¹.

En el ámbito nacional, la Corte ha reconocido la Ley 57 de 1985, “por la cual se ordena la publicidad de los actos y los documentos oficiales”, expedida antes de la carta de 1991, como una regulación constitucionalmente admisible que regula el contenido del derecho previsto en el artículo 74 superior.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir las respuestas que las autoridades ofrecen a la solicitud de acceso a los documentos oficiales, la jurisprudencia constitucional plantea la extensión de los requisitos constitucionales instituidos para el derecho de petición. En este sentido, la respuesta de la autoridad pública deberá: “i) resolver de fondo lo pedido; ii) indicar claramente el procedimiento para la obtención de la información; iii) motivar suficientemente su decisión en caso que, con base en las excepciones previstas en la ley, se niegue el acceso a los documentos, y iv) otorgar respuesta definitiva a la solicitud”²

EL DEBER DE CUIDADO DE LOS ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LA OBLIGACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

Ha advertido la Honorable Corte Constitucional que, “*las entidades públicas que administran información, deben observar una serie de obligaciones que les imponen los derechos de petición y de habeas data. Esa Corporación ha precisado que existe una obligación general de seguridad y diligencia en la administración y conservación de datos personales que reposan en los archivos que custodian*”³

Así, existen una serie de obligaciones específicas de corregir e indemnizar por los perjuicios ocasionados por el mal manejo de la información, bien por la acción o por la omisión de las entidades administradoras. A estos deberes se suma el de reconstrucción del archivo ante su pérdida o destrucción; En efecto, ha sido por la jurisprudencia constitucional que se ha resaltado el deber de las entidades públicas de reconstrucción del archivo por pérdida o destrucción, puesto que:

“Cuando los archivos de una entidad hayan desaparecido por causas ajenas a la misma administración, y la información allí depositada sea necesaria para tomar una decisión de fondo respecto de un proceso judicial

¹ (Sentencia de septiembre 19 de 2006, Serie C No.151). Corte Interamericana de Derechos Humanos

² Sentencia T-167/13 Magistrado sustanciador: NILSON PINILLA PINILLA

³ Sentencia T-926 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.

o administrativo, esta Corte ha establecido la obligación de que dicha información sea reconstruida”⁴

En ese tipo de casos la Corte Constitucional ha considerado que en aplicación de la garantía al debido proceso contenido en el artículo 29 Constitucional, “la reconstrucción de un expediente debe hacerse de manera ágil, pues de no ser así puede llegar a vulnerarse el debido proceso. Si bien la pérdida de un expediente justifica cierta dilación en el proceso o en la actuación administrativa, a ésta no se debe añadir el retardo en su reconstrucción. El deber de adelantar un proceso sin dilaciones injustificadas se complementa en lo relativo a actuaciones de funcionarios de la administración con uno de los principios que deben guiar la función administrativa, cual es la celeridad”⁵.

En conclusión la Corte Constitucional ha señalado que: i) las entidades que administran los archivos públicos tienen una obligación general de seguridad y diligencia en la conservación de la información personal que custodian; ii) existen deberes específicos de corrección, reconstrucción e indemnización, por el mal manejo de los datos por parte de las entidades que los custodian; iii) en materia de reconstrucción de archivos y expedientes de la administración, la jurisprudencia lo ha ordenado con fundamento en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y actualmente, las del Código General del Proceso; y iv) el Archivo General de la Nación expidió el Acuerdo número 07 del 15 de octubre de 2014, que regula el proceso de reconstrucción de expedientes por parte de las entidades públicas⁶.

Como resultado de las anteriores reflexiones, es claro que, ante la pérdida o destrucción de documentos públicos, se genera para el Estado la obligación de iniciar inmediatamente el trámite de reconstrucción, no siendo dicha pérdida oponible a la ciudadanía, ya que existe en el ordenamiento jurídico el mecanismo para efectuar su recuperación.

En un caso similar a este, y sobre la obligación del despacho judicial que tiene a cargo el expediente, la Corte Constitucional en sentencia T-425 de 2011 estableció:

“Por lo anterior, es claro que el derecho de petición de la demandante fue conculcado por el Juzgado 6° de Familia del Circuito de Bogotá, y continúa siendo transgredido, pues sólo mediante el efectivo desarchivo del expediente la petición quedará satisfecha, salvo que – por alguna circunstancia – sea imposible adelantar tal actuación. Como quiera que las autoridades judiciales en sede de tutela consideraron – equivocadamente – que no existía vulneración alguna, ambas decisiones que se revisan serán revocadas. En su lugar y tras amparar el derecho fundamental mencionado, se ordenará al Juzgado 6° de Familia del Circuito de Bogotá tramitar todos los recursos a su alcance hasta tanto el expediente de divorcio de Jaime Gómez Méndez contra Isabel Bodensiek Bello sea desarchivado. Para esto,

⁴ Sentencia T-605 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.

⁵ Sentencia T-605/14 Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

⁶ Sentencia T-398/15 Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

deberá informar a la demandante, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, qué actuaciones ha adelantado para el efectivo desarchivo del referido proceso y en cuánto tiempo lo tendrá a su alcance, señalando qué medidas adoptará para lograrlo. En caso de que no pueda ser desarchivado en menos de quince días, deberá informar a la peticionaria en cuánto tiempo será esto posible. En todo caso, la obligación de desarchivar el expediente y de adoptar todas las medidas pertinentes para lograrlo, sólo cesará cuando se materialice tal actuación, salvo que sea imposible llevarlo a cabo”.

A través de la sentencia T-328 de 2020 se estableció:

“el procedimiento de reconstrucción de expedientes, reglado en el artículo 126 del Código General del Proceso, constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente. Este trámite puede adelantarse de oficio o a petición de la parte interesada, y es indispensable para determinar lo necesario a efectos de proferir una decisión que resuelva el fondo de la controversia de manera efectiva”

CASO CONCRETO:

Se encuentra acreditado documentalmente (págs. 12, 16 y 17 del archivo 004 del expediente digital) y así fue aceptado por la oficina de Archivo Central de ésta dirección ejecutiva de administración judicial, que el actor solicitó el desarchivo del expediente con rad. N° 11001310301719860469200, en varias oportunidades.

Al respecto, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial allegó certificación expedida por el coordinador de grupo archivo central, donde se limitan a informarle que:

“El expediente no fue encontrado, dado que del año 2012 no se halla el paquete 159 del archivo central correspondiente al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, que se procedió a realizar la verificación en bodega Montevideo 2 del proceso y luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda exhaustiva en bodega Montevideo 2, informó que, en el archivo denominado “CONVIDA”, se registró que el expediente solicitado fue identificado con el número de registro 99925 el cual corresponde a la caja 159 del año 2012; por lo tanto, se realizó rastreo físico en bodega, hallando la caja pero el proceso no se encontró físicamente y en la tapa se observó manuscrito que indica que el proceso con registro 99925 fue desarchivado.

Que de igual forma, se observa que posteriormente en fecha 23 de noviembre de 2012 el Juzgado registró que, el proceso fue devuelto a “ARCHIVO CENTRAL - CONVIDA INGRESO No. 34538 CAJA 30”. Por consiguiente, se procedió a la búsqueda en bodega MONTEVIDEO 2 de dicha caja, pero el proceso No. 1986-4692, no se encuentra relacionado en la planilla pegada a la caja número 30 del

archivo Convida, ni físicamente. Y, se constató que, el número de ingreso 34538 no coincide con los datos del proceso.

Por lo que es necesario que el JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO, le informe al usuario si este reposa en el Despacho o en caso de un eventual re-archivo posterior al año 2012, le aporte copia del acta y planilla donde esté relacionado el expediente que acredite el recibido por nuestra dependencia, caso contrario es imposible realizar una búsqueda efectiva”.

Observando, este Despacho que la respuesta dada al actor, resulta de mero trámite y en nada garantiza ni el derecho fundamental de petición, ni el de acceso a documentos públicos.

Al respecto, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, al rendir su informe insta al Despacho a informar que:

“Obsérvese que el mismo corresponde al paquete 45 del año 2012. No obstante, en los anexos aportados con el escrito de tutela se evidencia que el proceso fue devuelto al archivo central para que se incorporara en la caja 159 con ingreso 99925 que corresponde al archivo convida”

Lo cierto es, que ni ante el Juez constitucional, ni ante la oficina de archivo central acredita que dicho expediente fue entregado a esa dependencia.

Así las cosas, es más que razonable la exigencia de la Coordinación del grupo de Archivo Central al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, de acreditar ante dicha dependencia la entrega del expediente, pues teniendo certeza que este fue recibido por el archivo central, es dicha dependencia a quien le corresponde realizar todas las gestiones tendientes a su ubicación y de ser el caso, asumir las consecuencias disciplinarias e incluso penales por su pérdida, ello sin perjuicio de la obligación de reconstrucción que le asistirá a la autoridad judicial conforme las reglas del Código General del Proceso.

En consecuencia, considera esta falladora que al mantener en completa incertidumbre e indeterminación al ciudadano respecto de la solicitud de desarchivo del expediente judicial, se conculca su derecho fundamental de petición, pues, no es el accionante quien debe asumir las consecuencias negativas del desorden administrativo, que ha conllevado que a la fecha no se tenga certeza siquiera de si el expediente fue entregado a la oficina de archivo central.

En conclusión, se ordenará al Juzgado 17° Civil del Circuito de Bogotá que en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia proceda a acreditar documentalmente ante la oficina de archivo central de Bogotá la entrega del expediente con Rad. 11001310301719860469200, de lo contrario, se deberá realizar la búsqueda exhaustiva del mismo durante los treinta (30) días siguientes, y en caso de pérdida, iniciar su reconstrucción conforme las reglas del art. 126 del C.G.P., debiendo dar aviso a las autoridades penales y disciplinarias.

En caso de que la autoridad judicial acredite ante la oficina de archivo central la entrega del expediente, ésta última deberá dentro de los treinta (30) días siguientes realizar su búsqueda exhaustiva, cuyas gestiones y resultados deberán ser informados al Juzgado de conocimiento y al Director seccional de administración judicial, asimismo, deberá informar o responder de fondo la petición al convocante y ante la eventual pérdida del expediente, se deberá presentar denuncia penal y disciplinaria contra los servidores responsables, sin perjuicio del trámite de reconstrucción que deberá iniciar la autoridad judicial, si el proceso de búsqueda culmina sin resultados satisfactorios.

De todo lo anterior se deberá comunicar al ciudadano.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá D.C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad constitucional

RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jairo Eduardo Garzón Rojas frente a su solicitud de desarchivo del expediente con Rad. 11001310301719860469200.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, que en el **término de quince (15) días** siguientes a la notificación de esta providencia proceda a acreditar documentalmente ante el grupo de archivo central de Bogotá – Cundinamarca - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial la entrega del expediente con Rad. 11001310301719860469200 de lo contrario, se deberá realizar la búsqueda exhaustiva del mismo durante los treinta (30) días siguientes, y en caso de pérdida, iniciar su reconstrucción conforme las reglas del art. 126 del C.G.P., dando aviso de la pérdida a las autoridades penales y disciplinarias.

Una vez se cuente con el expediente, se le deberá comunicar inmediatamente al actor.

TERCERO: ORDENAR al Coordinador del Grupo de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, que dentro de los **treinta (30) días siguientes** a que el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá acredite documentalmente la entrega ante esa dependencia del expediente con Rad. 11001310301719860469200, realice la búsqueda exhaustiva, rindiendo dentro de ese mismo término informe detallado a la autoridad judicial y al Director ejecutivo Seccional, de las gestiones realizadas y de los resultados obtenidos.

Una vez se cuente con el expediente, se le deberá comunicar inmediatamente al actor y darle respuesta de fondo a su petición.

De haber ocurrido la pérdida del expediente bajo custodia de la oficina de archivo central, deberá el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca – Amazonas presentar de manera inmediata denuncia penal y disciplinaria, sin perjuicio del trámite judicial de reconstrucción.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito, del contenido de esta sentencia.

QUINTO: Si este fallo no fuere Impugnado, REMÍTASE el Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La Juez

LEIDY TATIANA CORREDOR ALFONSO

D.R.

Firmado Por:

Leidy Tatiana Corredor Alfonso
Juez
Juzgado De Circuito
Laboral 040
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

4f8638275f8f8116ac90e909a88da34eab102377649567cf5f251cdb993f7d87

Documento generado en 24/01/2022 11:21:47 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>